



Bruselas, 14 de enero de 2009.

*Sra. Baronesa
Catherine Margaret ASHTON
Comisaria de Comercio Exterior de la Unión Europea.*

*Sra.
Benita FERRERO
Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.*

Asunto: Negociaciones del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica.

Como redes europeas, trabajando en cooperación al desarrollo, derechos humanos, medioambiente y comercio justo, continuamos dando seguimiento a las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central (UE-AC). Con este documento expresamos nuestra preocupación por el rumbo de las mismas en el contexto actual. Asimismo reiteramos algunas propuestas antes de que inicie la VI ronda de negociación.

No sin antes contextualizar estas negociaciones en el marco de la crisis financiera y económica global, que hace necesario advertir que la desregulación de la acción de los estados para favorecer intereses privados, ligados a la especulación financiera y las grandes empresas, tiene también sus límites en estos acuerdos de asociación en los que se busca favorecer el comercio libre de bienes, servicios y capitales, por encima de la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y del derecho al desarrollo de sus propios pueblos.

I. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Centroamérica afectan el derecho al desarrollo en lugar de promoverlo.

Hemos insistido para que los Temas Singapur: compras gubernamentales, competencia e inversiones sean excluidos de las negociaciones. Estos temas reducen la autonomía de los gobiernos para definir sus propios modelos de desarrollo, la soberanía sobre sus recursos naturales, limitando los requisitos de desempeño a las inversiones, exponiendo las empresas

nacionales a una competencia desleal frente a las multinacionales y entregándoles a estas más ventajas, derechos y mecanismos de exigibilidad, que la protección misma de los derechos humanos.

La UE ha reiterado que sus intereses económicos con Centroamérica son mínimos, que lo que le interesa es promover el desarrollo sostenible y la integración de la región. Sin embargo no sólo no hay un real reconocimiento de las asimetrías, sino que incluso se pretende imponer a los centroamericanos la apertura total del 90% de sus mercados en un lapso de 10 años, sin siquiera posibilitar una discusión más amplia sobre fórmulas y mecanismos de Trato Especial y Diferenciado congruentes con las asimetrías existentes. Tampoco se han establecido compromisos concretos para la transferencia de conocimiento y tecnología a los países centroamericanos.

Este acuerdo de asociación debería ser una oportunidad para que la UE y los Países Centroamericanos negocien verdaderamente un acuerdo nuevo e innovador que realmente beneficie a ambas regiones. Otros ejemplos negativos como el CAFTA y otros TLCs no deberían ser usados como ejemplos, ya que han afectado más que beneficiado a muchos sectores productivos en Centroamérica.

II. Sobre la ausencia de un estudio de impacto socioambiental:

De cara a la aprobación del mandato de negociación propuesto por la Comisión Europea, de marzo de 2007, el Parlamento Europeo recomendó que se tuviera un estudio de impacto socioambiental previo a las negociaciones. Desafortunadamente, este ha sido recién contratado, lo que prevé que el estudio no llegará a tiempo para las negociaciones. Quisiéramos insistir sin embargo que dicho estudio tenga en cuenta una dimensión de derechos humanos y posibles impactos sobre el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos laborales, etc.

Existe una ambivalencia entre lo predicado por la UE en cuanto a la promoción de un desarrollo sostenible y, la prisa con la que quieren terminar estas negociaciones. Insistimos una vez más en agendar las negociaciones de tal manera que se conozcan de manera oportuna las conclusiones y recomendaciones del estudio de impacto, de tal forma que sean consideradas por los negociadores de ambas partes.

III. Sobre la falta de aceptación de un mecanismo birregional de consulta con la sociedad civil de ambas partes en el seguimiento de las negociaciones.

Lamentamos que no se haya previsto un mecanismo de consulta a la sociedad civil en el marco de las negociaciones, pese a ser una solicitud reiterada. Tampoco la propuesta del CESE y del CC-SICA, órganos de consulta de los respectivos sistemas de integración, ha sido considerada. Lo anterior, deja muchas sombras sobre la transparencia de este proceso. Ya las partes han decidido que no habrá este mecanismo tampoco para las 5 rondas que restan de la negociación.

Por tanto, de cara al futuro acuerdo insistimos para que se establezca un mecanismo incluyente y permanente de consulta birregional abierto, donde estén los órganos institucionales de consulta de las dos regiones – el CESE y el CC-SICA – y también otras

organizaciones de carácter nacional o internacionales como organizaciones de derechos humanos, ambientales, de indígenas, de campesinos, etc., puedan tener cabida.

Igualmente proponemos la celebración de un foro de diálogo birregional con la sociedad civil de ambas partes antes de la culminación de las negociaciones. Este espacio debe permitir intercambiar sobre el avance de las negociaciones y dar respuestas a las propuestas de la sociedad civil.

IV. Sobre derechos humanos, ambientales y derechos de los pueblos indígenas:

Hemos insistido a lo largo de todo este proceso en que se integre en las negociaciones los 27 convenios que se invocan como obligatorios en el SGP plus, ampliando el mecanismo de monitoreo que allí se establece a la participación de la sociedad civil. No queremos que estos derechos se enuncien como principios, sino que tengan exigibilidad en la aplicación del acuerdo y, mecanismos transparentes y participativos para asegurar su respeto.

A estos convenios sugerimos agregar cuatro: el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, el Convenio sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, el Convenio contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas y, la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Sociales, económicos y culturales de la ONU.

Insistimos igualmente en que sea prerequisite, antes de firmar el acuerdo, que los gobiernos centroamericanos que no lo han hecho, ratifiquen el Tratado de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Esto es una manera de prevenir que en el futuro se vuelvan a cometer crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra en Centroamérica. Justamente los gobiernos que padecieron conflictos armados internos se niegan a su ratificación, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, lo que nos genera perplejidad y, deja por tanto muchas dudas de un compromiso pleno de parte de estos gobiernos con los derechos humanos y de que puedan hacer parte de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Sobre el respeto al medio ambiente, recordamos la vulnerabilidad ambiental de Centroamérica. El Acuerdo de Asociación no debe potenciar un modelo de desarrollo que agote las fuentes de vida y ponga en peligro de extinción a la economía campesina, a las comunidades indígenas y tribales. Debe haber compromisos ambientales responsables y verificables de ambas partes, en los que la UE, reconociendo las asimetrías, debe contribuir con apoyo técnico y científico a inversiones sostenibles ambientalmente.

La UE¹ ha promovido la paz y la democratización en Centroamérica, continúa apoyando la implementación de los acuerdos de paz, ha contribuido a la promoción de las libertades fundamentales y superación de la impunidad. Un paso adelante en la relación birregional debe por tanto significar también un avance en materia de derechos humanos, gobernabilidad, democracia y desarrollo humano sostenible para la región centroamericana, debe haber por tanto un equilibrio real y coherente en los tres ejes del acuerdo de asociación.

¹ Todas las políticas de la Unión Europea deben ser coherentes con su política de desarrollo. Esto está indicado en el Artículo 130 V "La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados en el artículo 130 U en las políticas que aplique y que puedan afectar a los países en desarrollo."

Firman,

Erik van Mele
Oxfam Internacional

Charly Poppe
Amigos de la Tierra Europa

Annelie Andersson
Aprodev

Souhayr Belhassen
Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH-

Dilcia Figueroa
Grupo Sur

Martin Wolpold-Bosien
Fian Internacional

Jennifer Cornally
CIDSE

Lizzete Robleto
CIFCA

Para responder a este comunicado pueden dirigirse a:

Luis Guillermo Pérez
CIFCA.
Rue de la Linière 11, b-1060 Bruselas.
cifca@cifcaeu.org
www.cifca.org

Lourdes Castro
GRUPO SUR
60, Rue des Quatre-Vents, 1080 Bruxelles
gruposur@agora.eu.org
www.gruposur.eu.org